

den en los términos que exige la Constitución Federal, para proceder á dicha ocupación sin violar el art. 16 de dicha ley; que tampoco consta que hayan precedido á la instalación de la tribu de kikapoos en los terrenos mencionados, las formalidades que proviene el art. 27 del referido Código fundamental.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que amparó al quejoso. Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquise, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M^a Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico, México, Marzo 18 de 1875.—*Luis M. Aguilar.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por D. Diego G. Lavin, contra unos acuerdos del Ayuntamiento que vulneran en su persona algunas garantías.

Pedimento del C. promotor fiscal.

Febrero 18 de 1875.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor del mismo, alegando de buc-

na prueba en el juicio de amparo promovido por el C. español Diego G. Lavin, contra los acuerdos del Ayuntamiento de la Capital, por los que se le obliga á pagar por cada corrida de toros, mayor cantidad de la que estipuló desde Agosto de 1865, con el Ayuntamiento de la extinguida Villa del Montecillo, dice: que el peticionario así por los recibos que tiene acompañados, autorizados por D. Alejandro Nieva, agente municipal que fué desde 1868 hasta Abril de 1870, como por la declaración del mismo Sr. Nieva, y la de D. Carlos Guevara y D. Santiago Castillo, presidente propietario el primero, y suplente el segundo del Ayuntamiento de dicha extinguida Villa; en el año de 1865, se comprueba plenamente el contrato que con tal corporación celebró el mencionado Sr. Lavin, para dar funciones de toros, pagando por cada una de ellas, ocho pesos que se le asignaron según lo estipulado; y mediante tal convenio, el Sr. Lavin ha estado justamente en su derecho para oponerse á aquel aumento que malamente ha podido disponer el R. Ayuntamiento de la Capital, sin que antes hubiese sido resindido aquel contrato.

En esta virtud, el peticionario ha justificado, cuanto basta en derecho, la violencia cometida en su persona é intereses y aquella R. Corporación extralimitando sus atribuciones, ha violado, por cierto, las garantías individuales de que hace mérito el Sr. Lavin, principalmente, las otorgadas por los arts. 16 y 17 de la Constitución General, por suspender las corridas de toros que aquella persona ha estado dispuesta á dar, sin mas motivos, que haberlo así acordado la misma corporación, y no la autoridad competente, lo que constituye la infracción de aquellos artículos por las molestias causadas al Sr. Lavin en su persona y derechos adquiridos, y por la fuerza que se le ha hecho al impedírsele dichas funciones de toros, dejando de percibir los productos que han podido proporcionarle aquellos espectáculos; y ese Juzgado, por lo mismo,

está en el deber de acordar el amparo que solicita con fundamento de lo que dispone la ley de 20 de Enero de 1869.

Tal es mi parecer, que someto al mas ilustrado de ese Juzgado. San Luis Potosí, Julio 29 de 1874.—Gregorio Vazquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Noviembre 23 de 74.

Visto este juicio de amparo promovido por el ciudadano español Diego G. Lavin, de esta vecindad, contra dos acuerdos del Ayuntamiento de ésta Capital, el primero de 7 de Octubre del año pasado, y el segundo, de 19 de Junio del presente año, por conceptuar que vulneran en su persona las garantías que aseguran los arts. 14, 16 y 17, parte 2ª de la Constitución, imponiéndole por contribucion en cada corrida de toros que dé en la plaza de su propiedad que existe en esta ciudad, mayor cantidad que la de ocho pesos extipulada en el contrato de 26 de Agosto de 1865, que celebró con el Ayuntamiento de la extinguida Villa del Montecillo. Vistos el escrito de queja en que se reputa comprendido el caso en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, los pedimentos del C. Promotor fiscal, el informe con justificación de la autoridad ejecutora, las pruebas rendidas por el quejoso, los alegatos de ambas partes, y la citacion para sentencia, con todo lo demás que en autos consta, se tuvo presente, y convino ver; y

Considerando: que la base de que debe partirse para resolver la cuestion presente, es la comprobacion legal de la existencia del contrato que implora Lavin á su favor, así como la de que se ha alterado la cuota extipulada por el Ayuntamiento de ésta Capital.

Que consta plenamente probado por el documento de fs. 1, certificación de fs. 62 y demás pruebas rendidas por Lavin, que

en 26 de Agosto de 1865, celebró con los prefectos propietario y suplente del Municipio del Montecillo (hoy barrio,) un contrato en que se extipuló que debon pagar la pension de ocho pesos, por cada corrida de toros que diese en la plaza de su propiedad, por lo que al imponérsele mayor cantidad por el Ayuntamiento de ésta Capital, primero de veinte y cinco pesos, y despues de treinta, más el adicional, fs. 12, 13, 14 y 47, se ha atacado á Lavin un derecho adquirido por aquel contrato con infraccion del art. 14 constitucional, y al constituirse en Juez el mismo Ayuntamiento, aumentando aquella cuota, no obstante las protestas de Lavin, ha infringido además, el art. 16 á la vez que la parte 2ª del 17 de la Constitución, haciéndose justicia por su propia mano.

Que si bien se objetan visos de nulidad á aquel contrato, tambien existen razones legales en que pudiera apoyarse su validez, circunstancia que ya está indicando la necesidad de un juicio contradictorio, conocer del cual, no pertenece á este Juzgado.

Que en vista de las consideraciones precedentes, no hay motivo para ocuparse de las otras cuestiones que se suscitan, siendo bastantes aquellas para fundar la procedencia del recurso, á la vez que la concesion de él.

Por lo expuesto, y de conformidad con el pedimento fiscal, atentos los arts. 101 y 102 de la Constitución, debía declarar y declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege al ciudadano español, Diego G. Lavin, contra los acuerdos del Ayuntamiento de esta Capital, de 7 de Octubre del año pasado, y 19 de Junio del corriente año, que dieron causa al presente juicio.

Hágase saber, publíquese y elévese en revision estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia. Lo decretó y firmó en definitiva, el C. Juez de Distrito del Estado. Doy fé.—Conrado Diaz Soto.—Donaciano Monroy, secretario.

*Recuratoria de la Suprema Corte de Justicia.**

México, Febrero 18 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por D. Diego G. Lavin, contra unos acuerdos del Ayuntamiento de esa Ciudad, por los que se impusieron al quejoso mayores derechos por las corridas de toros que ha estado dando en la plaza de su propiedad, que los contrató por escritura pública al establecer dicha plaza. Visto el informe del Ayuntamiento; la prueba rendida por el promovente; el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, se declara: Que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de San Luis Potosí, en 23 de Noviembre del año próximo pasado, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. español Diego G. Lavin, contra los acuerdos del Ayuntamiento de 7 de Octubre del año de 1873 y 19 de Junio del año pasado, que dieron causa á la promocion del presente recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron:—*José María Iglesias.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*

El que suscribe, certifica: que aunque el C. Magistrado Garza asistió á la votacion de este amparo, no aparece en el su firma, porque en esta fecha en que se ha puesto

TOMO VII—PARTE II.

en limpio la anterior sentencia, ya se ha separado de ésta Capital y está en marcha para la de Guatemala. México, Febrero 27 de 1875.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 27 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila, y seguido en el de Distrito de Nuevo Leon, por varios comerciantes, contra la determinacion del Ayuntamiento del Saltillo, de que trasladaran á un lugar determinado sus expendios de carne.

Pedimento del C. promotor Fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito:

Los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Este principio altamente filosófico, está consignado expresamente en el artículo 1º de nuestra Constitución federal. Los Legisladores de 57 sabian muy bien que sin garantías individuales no era posible una buena organizacion social. Por esto se ocuparon con preferencia de señalarlos, poniendo á la vez un dique que contuviera los desmanes de las autoridades, en perjuicio de cualquiera individuo que se viera amagado en sus derechos.

Al poder judicial le fué encomendada esta noble facultad; y á pesar de la oposicion que se hizo al crear esta institucion, estamos viendo diariamente los beneficios de su influencia moralizadora. Ya no sucede como decia el señor Ocampo en una de las sesiones del Congreso constituyente: "Hasta ahora en cuanto á infracciones de la Consti-